

Cuando más falta hace

Frente a la lógica del mercado, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil vienen reivindicando el reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público. Gracias a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010 se reconoció este acceso como un derecho humano básico y jurídicamente vinculante; un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.

Vivimos una auténtica burbuja hídrica: se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua. La privatización supone un sabotaje social a la economía de las familias, porque, al día siguiente de la privatización, dependerán de la voluntad de las grandes compañías privadas, de los “señores del agua”.

Además, estamos intensificando el proceso ahora, en plena crisis financiera, cuando no hay condiciones en los mercados para liberalizar. Es decir, estamos malvendiendo nuestro tesoro con cargo a las tarifas que pagaran nuestros ciudadanos cuando más falta la solidaridad con las familias que más están sufriendo la crisis.

En estos últimos años hemos visto cómo se incrementa la precariedad de la población: aumenta el porcentaje de personas que han perdido la vivienda, baja la media de ingresos mensuales, sube la tasa de paro, aumentan las personas inmigrantes cuya familia ha tenido que regresar al país de origen, más de la mitad de las personas en situación de desempleo carece de cobertura, crece el desempleo de larga duración, sube el número de familiares por hogar, se fragiliza el capital social, aumenta el aislamiento social, empeora la situación anímica y la salud... Tenemos un 25% de población vulnerable y el hecho de tener agua o no tenerla supone tener dignidad o perderla. Cuando más necesitamos la “existencia de lo público”, este va y se “malvende”

Por estas razones, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y los diversos movimientos sociales (sindicatos, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos y organizaciones de consumidores) están realizando una campaña para que los alcaldes –máximos responsables de la gestión del ciclo urbano del agua y el saneamiento- se comprometan a defender, y difundir, desde su cargo público, un modelo del agua basado en el bien común y rechazando una visión mercantilista del mismo. España no puede vender su futuro al mejor postor, y el agua es parte importante del porvenir de nuestro país.

Luis Babiano

Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)